

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE  
BOGOTÁ D.C.**

**ACCIÓN DE TUTELA**

**RADICADO: 11001-41-05-008-2020-00496-00**

**ACCIONANTE: LAURA MARÍA CÁRDENAS TRUJILLO**

**ACCIONADO: SERVICIOS TEMPORALES UBICANDO S.A.S.**

**SENTENCIA**

En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), procede este Despacho Judicial a resolver la acción de tutela impetrada por **LAURA MARÍA CÁRDENAS TRUJILLO**, quien solicita el amparo de sus Derechos Fundamentales al Mínimo Vital y a la Vida Digna, presuntamente vulnerados por **SERVICIOS TEMPORALES UBICANDO S.A.S.**

**RESEÑA FÁCTICA**

Manifiesta el accionante, que ingresó a laborar al servicio de **SERVICIOS TEMPORALES UBICANDO S.A.S.** el día 07 de octubre de 2019, en el cargo de mercaderista.

Que con ocasión a la pandemia por el Covid-19, la empresa le concedió vacaciones durante 15 días en marzo de 2020.

Que posteriormente, la empresa le informó que continuaría en su casa sin trabajar, y que seguiría recibiendo el salario con normalidad.

Que la empresa nunca le informó que su contrato de trabajo se encontraba suspendido, en licencia no remunerada, o disfrutando de vacaciones anticipadas.

Que no existe documento en el que autorice algún descuento de nómina, de la liquidación o de la licencia de maternidad.

Que la empresa suspendió el pago de salarios el 24 de julio de 2020, por el nacimiento de su hijo.

Que la licencia de maternidad finalizó el 26 de octubre de 2020, y se reincorporó a laborar el 27 de octubre de 2020.

Que el 10 de noviembre de 2020, renunció voluntariamente.

Que el 25 de noviembre de 2020, la empresa pagó la licencia de maternidad, pero descontó la suma de \$543.000 sin mediar autorización.

Que la empresa pagó la liquidación de prestaciones sociales, pero descontó el salario del 01 al 10 de noviembre de 2020.

Que tiene 25 años de edad, es madre cabeza de hogar, vive con sus 2 hijos, paga arriendo y no cuenta con ingreso económico alguno.

Por lo anterior, solicita se tutelen sus Derechos Fundamentales, y se ordene a la empresa **SERVICIOS TEMPORALES UBICANDO S.A.S.**, reembolsar los valores descontados de su licencia de maternidad y de la liquidación de prestaciones sociales.

### **CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA**

#### **SERVICIOS TEMPORALES UBICANDO S.A.S.**

La accionada allegó contestación el 03 de diciembre de 2020, en la que manifiesta que es cierto que la accionante laboró para la empresa, bajo un contrato por obra o labor.

Que el 24 de marzo de 2020 le comunicó el disfrute de las vacaciones anticipadas del 26 de marzo al 27 de abril de 2020, comunicación que fue firmada por la trabajadora.

Que mediante comunicación del 24 de abril de 2020 concedió vacaciones anticipadas del 27 de abril al 10 de mayo de 2020, comunicación que fue firmada por la trabajadora.

Que como la trabajadora llevaba tan solo 5 meses trabajando, no tenía derecho al disfrute de las vacaciones, razón por la cual fueron concedidas de manera anticipada.

Que pagó por concepto de vacaciones anticipadas 58,09 días, esto es, \$1.735.130.

Que en ningún momento suspendió el contrato de trabajo.

Que la liquidación de prestaciones sociales arrojaba un valor de \$1.171.270 más \$240.655 correspondiente a los 3 días laborados en el mes de noviembre.

Que en comunicación del 13 de noviembre de 2020, explicó a la trabajadora los motivos de los descuentos efectuados.

Que el 13 de noviembre de 2020, la trabajadora autorizó por escrito el descuento.

Que únicamente descontó a la suma de \$323.205 de la licencia de maternidad.

Que el descuento de \$285.112 corresponde a los aportes a salud y a pensión de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020.

Que una vez efectuados los descuentos, el 26 de noviembre de 2020 consignó a la trabajadora la suma de \$2.932.155 por concepto de la licencia de maternidad.

Que no es cierto que sea madre cabeza de familia, pues según la información de la hoja de vida convive en unión libre con el señor CARLOS HERNÁNDEZ quien es el padre de sus hijos, y adicionalmente tiene una microempresa de trajes de bioseguridad.

Por lo anterior, solicita se niegue el amparo en atención a que no ha vulnerado derechos fundamentales, y en gracia de discusión existen otros mecanismos judiciales.

## **CONSIDERACIONES**

### **PROBLEMA JURÍDICO:**

En concordancia con los hechos que fundamentan la acción de tutela, corresponde al Despacho responder el siguiente problema jurídico: ¿Es procedente la acción de tutela para ordenar el reembolso de los dineros descontados de la licencia de maternidad y de la

liquidación de prestaciones sociales de la señora **LAURA MARÍA CÁRDENAS TRUJILLO** por parte de la empresa **SERVICIOS TEMPORALES UBICANDO S.A.S.?**

### **MARCO NORMATIVO**

Conforme el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un instrumento judicial de carácter constitucional, subsidiario, residual y autónomo, dirigido a facilitar y permitir el control de los actos u omisiones de todas las autoridades públicas y excepcionalmente de los particulares cuando estos vulneren derechos fundamentales.

Esta acción constitucional puede ser interpuesta por cualquier persona a fin de obtener la pronta y efectiva defensa de los derechos fundamentales cuando ello resulte urgente para evitar un perjuicio irremediable, o cuando no exista otro medio de defensa judicial.

### **EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA.**

De acuerdo con reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corte Constitucional<sup>1</sup>, en armonía con lo dispuesto por los artículos 86 de la Carta Política y 6º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo judicial, para la protección inmediata de los derechos fundamentales, de carácter *subsidiario*. Esta procede siempre que en el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para la tutela judicial de estos derechos.

La Alta Corporación ha reiterado que no siempre el juez de tutela es el primer llamado a proteger los derechos constitucionales, toda vez que su competencia es subsidiaria y residual; es decir, procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial de comprobada eficacia, para que cese inmediatamente la vulneración<sup>2</sup>. Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección de los derechos fundamentales<sup>3</sup>.

Así las cosas, se puede indicar que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, esta resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo de los medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales de protección ordinarios al alcance

---

<sup>1</sup> Sentencias T-228 de 2012 y T-177 de 2011. Ver también las Sentencias T-731, T-677, T-641 y T-426 de 2014; T-891, T-889, T-788 y T-736 de 2013; T-1074, T-1058, T-1047, T-932, T-928, T-778, T-703, T-699, T-452, T-358, SU-195 y T-001 de 2012; SU-339, T-531, T-649, T-655, T-693, T-710 y T-508 de 2011; T-354 de 2010; C-543 de 1992, entre otras.

<sup>2</sup> Sentencia T-753 de 2006.

<sup>3</sup> Sentencia T-406 de 2005.

del actor, la acción de tutela será procedente si el juez constitucional logra determinar que:

**(i)** los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; **(ii)** se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable frente a sus derechos fundamentales; y, **(iii)** el titular de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección constitucional.

La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el perjuicio ha de ser **inminente**, esto es, que la amenaza o está por suceder prontamente; las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser **urgentes**; no basta cualquier perjuicio, se requiere que este sea **grave**, lo que equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea **impostergable**, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad<sup>4</sup>.

De igual forma, la Corte Constitucional ha aclarado que, pese a la informalidad del amparo constitucional, **el actor debe exteriorizar y sustentar los factores a partir de los cuales pretenda derivar el perjuicio irremediable, ya que la simple afirmación de su acaecimiento hipotético es insuficiente para justificar la procedencia la acción de tutela**. Así se pronunció la Corte, sobre el punto:

*“En concurrencia con los elementos configurativos que llevan a determinar que se está en presencia de un perjuicio irremediable, este Tribunal ha sostenido que, para que proceda la tutela como mecanismo de defensa transitorio, se requiere también verificar que dicho perjuicio se encuentre probado en el proceso. Sobre este particular, ha expresado la Corte que el juez constitucional no está habilitado para conceder el amparo transitorio, que por expresa disposición constitucional se condiciona a la existencia de un perjuicio irremediable, si el perjuicio alegado no aparece acreditado en el expediente, toda vez que el juez de tutela no está en capacidad de estructurar, concebir, imaginar o proyectar, por sí mismo, el contexto fáctico en el que ha tenido ocurrencia el presunto daño irreparable.*

*La posición que al respecto ha adoptado esta Corporación, reiterada en distintos fallos, no deja duda de que la prueba o acreditación del perjuicio irremediable es requisito*

---

<sup>4</sup> Sentencias T-136, T-331 y T-660 de 2010; T-147, T-809 y T-860 de 2009; T-409 y T-629 de 2008; T-262 y T-889 de 2007; T-978 y T-1017 de 2006; T-954 y T-1146 de 2005; providencias en las que la Corte declaró la improcedencia de la acción de tutela por la no ocurrencia del perjuicio irremediable.

*fundamental para conceder el amparo. Por ello, ha señalado la Corte<sup>5</sup> que quien promueva la tutela como mecanismo transitorio, no le basta con afirmar que su derecho se encuentra sometido a un perjuicio irremediable. Es necesario, además, que el afectado “explique en qué consiste dicho perjuicio, señale las condiciones que lo enfrentan al mismo y aporte mínimos elementos de juicio que le permitan al juez de tutela verificar la existencia del elemento en cuestión”<sup>6</sup>.*

En consonancia con lo anterior, la procedencia de la acción de tutela depende de la observancia estricta del principio de subsidiariedad, “*como quiera que este se encuentra ordenado a garantizar importantes principios de la función jurisdiccional, y asegura el fin contemplado por el artículo 86 de la Carta, que no es otro que el de brindar a la persona garantías frente a sus derechos constitucionales fundamentales. En este orden de ideas, en los casos en los que no sea evidente el cumplimiento de este principio, la tutela deberá ser declarada improcedente*”<sup>7</sup>.

En síntesis, la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y la naturaleza legal de las relaciones laborales, implican, en principio, la improcedencia de la acción de tutela, pues tratándose de trabajadores, éstos tienen a su disposición acciones judiciales específicas para solicitar el restablecimiento de sus derechos. Sin embargo, ante indiscutibles condiciones de debilidad de quien reclama, que suponen la protección reforzada de su estabilidad laboral, aquellas acciones ordinarias pueden resultar inidóneas o ineficaces para brindarles un remedio integral, motivo por el que la protección procederá de manera definitiva. Finalmente, la protección también podrá concederse, aunque de manera transitoria, si se verifica la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

#### **IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE ACREENCIAS LABORALES (T-040/2018 y T-043/2018).**

En lo que respecta al reconocimiento de acreencias laborales por medio de la acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, por regla general, dicha pretensión no es susceptible de ampararse por esta vía, por cuanto en el ordenamiento jurídico la jurisdicción ordinaria laboral o la jurisdicción de contenciosa administrativa tienen mecanismos idóneos y eficaces de defensa judicial, según el caso. Sin embargo, de manera excepcional, se ha contemplado la procedencia del amparo para obtener el pago de dicho tipo de acreencias cuando se afecta el derecho fundamental al mínimo vital.

---

<sup>5</sup> Sentencia T-290 de 2005.

<sup>6</sup> Sentencia T-436 de 2007.

<sup>7</sup> Sentencia T-649 de 2011.

Sobre este punto, la Sentencia **T-457 de 2011** indicó que:

*“[p]or regla general, la resolución de las controversias relativas al incumplimiento en el pago de acreencias laborales, entre ellas el salario o contraprestación mensual, es un asunto que compete a la jurisdicción laboral. (...) Sin embargo, la sólida línea jurisprudencial que por varios años ha trazado esta Corporación, plantea de forma pacífica una única excepción sobre la improcedencia general anotada. Ella se presenta en aquellos eventos en los que el no pago de la prestación tiene como consecuencia directa la afectación de derechos fundamentales, concreta y especialmente, el del mínimo vital”.*

Para tal efecto, el citado derecho se ha entendido como: *“aquella porción del ingreso que tiene por objeto cubrir las necesidades básicas como alimentación, salud, educación, recreación, servicios públicos domiciliarios, etc.”*<sup>8</sup> De ahí que su conceptualización no sólo comprenda un componente cuantitativo vinculado con la simple subsistencia, sino también un elemento cualitativo relacionado con el respeto a la dignidad humana como valor fundante del ordenamiento constitucional. En todo caso, siempre que se alega su vulneración, es necesario que el interesado pruebe los motivos que le sirven de fundamento para solicitar su protección, de manera que el juez pueda evaluar la situación concreta del accionante.

Ahora bien, es preciso señalar que en el área del derecho laboral y de la seguridad social existen dos tipos de derechos: los inciertos y discutibles, y los ciertos e indiscutibles.

Un derecho es cierto e indiscutible cuando está incorporado al patrimonio de un sujeto y hay certeza sobre su dimensión, es decir, cuando hayan operado los supuestos de hecho de la norma que lo consagra, así no se haya configurado aún la consecuencia jurídica de la misma. Por el contrario, un derecho es incierto y discutible cuando (i) los hechos no son claros; (ii) la norma que lo prevé es ambigua o admite varias interpretaciones, o (iii) su origen está supeditado al cumplimiento de un plazo o condición y existe una circunstancia que impide su nacimiento o exigibilidad.

La Corte Constitucional ha sostenido que por regla general la liquidación y pago de acreencias laborales escapa del ámbito propio de la acción de tutela, y solo de manera excepcional, se ha admitido su procedencia ante la falta de idoneidad del medio de defensa ordinario. No obstante, en cualquier caso resulta indispensable el carácter cierto

---

<sup>8</sup>Sentencia T-457 de 2011.

e indiscutible de las acreencias laborales que se reclaman, pues de ahí surge precisamente la transgresión de los derechos fundamentales cuya protección se solicita<sup>9</sup>:

*“El juez de tutela no puede ordenar el pago de un derecho incierto y discutible, pues aquello escapa de la órbita constitucional para radicarse en una discusión de rango legal que debe resolverse en la jurisdicción competente. En este orden de ideas, la acción de tutela sólo procede para el pago de derechos económicos, cuyo carácter cierto e indiscutible evidencia la trasgresión de derechos fundamentales.”*<sup>10</sup>

Teniendo en cuenta que la acción de tutela se invoca con el objetivo de superar en forma pronta y eficaz la vulneración, para que el juez constitucional pueda impartir órdenes de protección dirigidas a materializar las garantías fundamentales involucradas, resulta primordial la certeza y carácter indiscutible de las acreencias laborales con las que se lograría la realización efectiva de dichos derechos. De manera más concreta, la jurisprudencia ha establecido que la protección de derechos fundamentales que dependen del cumplimiento de obligaciones laborales requiere que se trate de derechos ciertos e indiscutibles reconocidos por el empleador y que sean ordenados por las normas laborales o declarados por medio de providencias judiciales en firme<sup>11</sup>.

Ahora bien, lo anterior de ninguna manera significa que quien reclame la existencia de acreencias laborales inciertas y discutibles no pueda acudir a las vías ordinarias para obtener su declaración, pues lo que se busca es precisamente que todas aquellas controversias carentes de incidencia constitucional, debido a su ausencia de definición plena, quedan sometidas al escrutinio del juez laboral<sup>12</sup>.

En la Sentencia **T-1496 de 2000**, la Corte sintetizó las reglas que la jurisprudencia ha decantado para determinar la procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamación de acreencias laborales:

*“ (...) la Corte ha señalado que una controversia laboral puede someterse a juicio de tutela, desplazando el medio ordinario de defensa cuando se reúnan las siguientes condiciones: (1) que el problema que se debate sea de naturaleza constitucional, es decir, que pueda implicar la violación de derechos fundamentales de alguna de las partes de la relación laboral, puesto que si lo que se discute es la violación de derechos de rango legal o convencional, su conocimiento corresponderá exclusivamente al juez laboral; (2) que la vulneración del*

---

<sup>9</sup> Sentencia T-001 de 1997. Reiterada en las sentencias SU-995 de 1999, y T-1983 de 2000.

<sup>10</sup> Sentencia T-1983 de 2000.

<sup>11</sup> Sentencia SU-995 de 1999.

<sup>12</sup> Sentencia T-194 de 2003.

*derecho fundamental se encuentre probada o no sea indispensable un amplio y detallado análisis probatorio, ya que si para la solución del asunto es necesaria una amplia controversia judicial, el interesado debe acudir a la jurisdicción ordinaria pues dicho debate escapa de las atribuciones del juez constitucional y (3) que el mecanismo alternativo de defensa sea insuficiente para proteger íntegramente los derechos fundamentales amenazados o vulnerados y no resulte adecuado para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable de carácter iusfundamental.”*

En esa medida, mientras las controversias que recaen sobre derechos ciertos e indiscutibles pueden ser tramitadas ante la jurisdicción constitucional, a condición de que se cumplan los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, las que giran en torno a la declaración de derechos inciertos y discutibles deben discutirse necesariamente en la jurisdicción ordinaria. Lo anterior en razón a que mientras los primeros constituyen una garantía para las personas cuya renuncia implica una vulneración a sus derechos fundamentales, los segundos, al tener un carácter transable y renunciable, implican una dimensión prestacional o económica que compete resolverlos al juez laboral.

### **CASO CONCRETO**

La señora **LAURA MARÍA CÁRDENAS TRUJILLO** interpone acción de tutela en contra de **SERVICIOS TEMPORALES UBICANDO S.A.S.**, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al Mínimo Vital y a la Vida Digna, y por lo tanto solicita se ordene el reembolso de los dineros descontados por su empleador de la liquidación de prestaciones sociales y de la licencia de maternidad.

Fundamenta sus pretensiones en que ingresó a laborar al servicio de la empresa accionada el 07 de octubre de 2019; que renunció de manera voluntaria el 10 de noviembre de 2020; que le fueron descontadas sumas de dinero de la liquidación de prestaciones sociales y de la licencia de maternidad, sin contar con autorización para ello.

Atendiendo las premisas fácticas y las pretensiones de la accionante, de entrada se debe indicar, que en este caso no se cumple el requisito de *subsidiariedad* para que la discusión se ventile por medio de la acción de tutela, por las razones que se pasan a exponer:

Como se esbozó en el marco normativo de esta providencia, para la procedencia del mecanismo constitucional es imprescindible acreditar que no se cuenta con otros medios de defensa judicial, o que teniéndolos, éstos no resultan idóneos y eficaces para lograr la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.

En este caso, la discusión deviene de los descuentos realizados a la accionante con ocasión la terminación de la relación laboral que la vinculaba con la accionada, es decir, se trata de un conflicto económico jurídico de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral, tal como se desprende de la lectura del artículo 2° del Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 2° de la Ley 712 de 2001: *“La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: 1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.”*

En ese orden, la accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial; no obstante, no acudió al juez ordinario laboral para la resolución de su conflicto, sino que, consideró prioritario acudir a la acción de tutela, frente a lo cual se debe decir, que prescindir de la Jurisdicción Ordinaria, en un caso como éste, comportaría la desnaturalización de la acción de tutela como un mecanismo subsidiario y lo convertiría en principal.

Ahora, en lo relativo a la idoneidad y a la eficacia del mecanismo ordinario, considera el Despacho que no pueden estar supeditadas a la voluntad de la interesada de ejercer o no su derecho de acción, sino a la efectiva demostración de que el mecanismo ordinario ha sido agotado y pese a ello persiste la vulneración.

En este mismo sentido, la Corte Constitucional ha señalado, que un proceso ordinario laboral que busque el reconocimiento de acreencias laborales, es idóneo para proteger los derechos fundamentales que eventualmente podrían estar en juego. Lo anterior, debido a que el objetivo de un proceso de esa naturaleza es solucionar los conflictos de orden laboral, contando con mecanismos de recaudo de pruebas que sin lugar a dudas permiten resolver los problemas en discusión y adoptar las medidas que eventualmente sean necesarias para la protección de los derechos afectados.

De este modo, ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, que en este caso corresponde a un proceso ordinario laboral eficaz e idóneo, la presente acción de tutela tan solo podría llegar a ser procedente como mecanismo transitorio en el evento de que se comprobara que el accionante se encuentra sometido a la posible materialización de un perjuicio irremediable.

Sin embargo, en el presente caso no hay prueba de la afectación inminente, urgente, grave e impostergable de los derechos a la dignidad humana o al mínimo vital de la accionante.

En los hechos séptimo y décimo del escrito de tutela manifestó lo siguiente: *“En la actualidad tengo 25 años de edad, madre cabeza de hogar, vivo con mis dos hijos pequeños,*

*pago arriendo y en el momento no cuento con ingreso económico alguno. La única persona que esporádicamente me ayuda es mi señora madre” y “En el momento estoy desempleada y no cuento con ingreso económico alguno, motivo por el cual no tengo la posibilidad de brindar a mis dos pequeños hijos lo necesario para su subsistencia”.*

Dichas afirmaciones carecen de soporte probatorio en el expediente, pues únicamente se aportó la carta de renuncia y la liquidación de prestaciones sociales, empero no se aportó documental que acredite los gastos y las deudas del hogar, la imposibilidad para solventarlos, o que los dineros descontados constituyan la única fuente de ingresos de la familia.

Fuera de las afirmaciones anteriores, no se adujo otra consecuencia derivada de los descuentos realizados por el empleador, así como tampoco se aportó prueba -siquiera sumaria- que permita entrever la afectación al Mínimo Vital y, en consecuencia, el peligro inminente de la Dignidad Humana de la accionante o de su familia.

Destáquese que lo pretendido en la acción de tutela no es el reembolso de salarios, sino de un descuento realizado por una sola vez, e inferior al valor del salario mínimo. En efecto, la accionada en la contestación informó, que el descuento fue por valor de \$608.317 y que responde a los siguientes conceptos: \$323.205 correspondiente al saldo adeudado por las vacaciones anticipadas pagadas y no causadas, y \$285.112 correspondiente al descuento legal de los aportes a salud y pensión de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020. A su vez, la accionada acreditó que el 26 de noviembre de 2020 pagó a la trabajadora la suma de \$2.932.155 por concepto de la licencia de maternidad. Circunstancias que descartan el perjuicio irremediable.

En los anteriores términos, no existen argumentos razonables para sostener que en este caso concreto no pueda acudir al proceso ordinario laboral y esperar las resultas del mismo, por cuanto al analizar las condiciones de vulnerabilidad del accionante: *(i) no pertenece a un grupo de especial protección constitucional, (ii) no se halla en una situación de riesgo y (iii) no carece de resiliencia, esto es, de capacidad para esperar la finalización de la vía judicial ordinaria.*

Ello, como quiera que no obra prueba dentro del plenario que demuestre una disminución en la accionante que le impida desarrollar actividad laboral, o que se encuentre en una situación de inminente riesgo que demande de su protección por la vía residual de la acción de tutela, sin que pueda esperar a las resultas de una decisión por parte del juez

natural dentro del proceso ordinario laboral, quien es el llamado a determinar si procede o no el reembolso de los descuentos.

Finalmente, los derechos pretendidos en la acción de tutela son inciertos y discutibles. Por un lado, la accionante alega que la empresa nunca le informó que se encontraba disfrutando de vacaciones anticipadas, y que los descuentos son ilegales por cuanto nunca suscribió autorización para que los realizaran. Por su parte, la accionada contraargumenta que los descuentos obedecen al disfrute de vacaciones anticipadas y no causadas por la trabajadora, por lo que, ante la renuncia, debía descontarlas, y asegura que sí hubo autorización escrita firmada y aceptada por la trabajadora. Dicha discusión torna incierto el derecho pretendido y por ende, improcedente a través de la acción de tutela, dado que amerita un análisis probatorio amplio y detallado propio del proceso ordinario laboral.

En conclusión, en el presente asunto:

- (i) Existe una vía idónea (acción ordinaria laboral) que aún no ha sido agotada;
- (ii) No se percibe la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ni una situación que revista tal gravedad, o que ponga al accionante en una situación de indefensión, de manera que amerite la intervención del juez constitucional.

En consecuencia, concluye el Despacho, que la presente acción de tutela es improcedente por no satisfacer el requisito de *subsidiariedad*.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley:

#### **RESUELVE**

**PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE** la acción de tutela de la señora **LAURA MARÍA CÁRDENAS TRUJILLO** en contra de **SERVICIOS TEMPORALES UBICANDO S.A.S.**, por las razones expuestas en esta providencia.

**SEGUNDO:** Notifíquese a las partes por el medio más eficaz y expedito, advirtiéndoles que cuentan con el término de tres (3) días hábiles para impugnar esta providencia, contados a partir del día siguiente de su notificación.

Por motivos de salud pública, y en acatamiento de las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura para evitar la propagación del coronavirus Covid-19, la impugnación deberá ser remitida al email: [j08lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j08lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co)

**TERCERO:** En caso de que la presente sentencia no sea impugnada, por Secretaría remítase el expediente a la Corte Constitucional para que surta el trámite eventual de revisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

  
DIANA FERNANDA ERASSO FUERTES  
JUEZ